

Los partidos en México y la coyuntura actual

ÁLVARO ARREOLA AYALA*

RESUMEN: En este trabajo se ofrece una breve reflexión sobre lo que ha sido el subsistema partidario mexicano y su importancia en el contexto actual. Se reconoce que los partidos políticos en el México de nuestros días desempeñan un papel relevante en la transformación de las instituciones, pero se pone en duda que exista un interés por llegar en el corto plazo a un verdadero sistema democrático. Las más recientes elecciones federales provocaron tensión social y riesgos de quebranto institucional, ante lo cual los partidos han mostrado serias limitaciones para conducir los cambios que la sociedad mexicana requiere.

ABSTRACT: This study provides a brief reflection of the Mexican party sub-system and its importance in the current context. Although it is a well-known fact that political parties in present-day Mexico play a key role in the transformation of institutions, the author questions whether there is a short-term interest in achieving a true democratic system. The most recent federal elections caused social tension and a risk of institutional collapse, in response to which parties have shown serious limitations as regards their ability to deal with the changes required by Mexican society.

Palabras clave: partidos, elecciones, democracia, instituciones.

Key words: parties, elections, democracy, institutions.

* Sociólogo e historiador. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido consejero electoral en el Consejo Estatal Electoral del Estado de México.

El principal rasgo que caracteriza al sistema político mexicano es, sin duda, el desfase entre el régimen previsto formalmente en la Constitución y el tipo de gobierno instaurado desde 1929 y sólo maquillado con una alternancia política en el año 2000, cuando después de 71 años de dominio hegemónico pleno, el viejo partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, perdiera la presidencia de la república.

El modelo político mexicano desarrollado en el siglo XX es un sistema a todas luces inequitativo, controlado por una burocracia que a partir del año 2000 ha fortalecido su alianza histórica con los grupos empresariales de más alto nivel nacionales y extranjeros. Es un sistema autoritario, que no permite que la lucha por el poder político se desarrolle en condiciones justas, democráticas.

En México, diferentes autores ensalzan el hecho de que en los últimos 20 años se haya conocido la alternancia en municipios y estados y que se cuente con autoridades electorales autónomas; pero es el momento de señalar que más que democrático el modelo sigue siendo autoritario. No se ha entendido la necesidad de hacer una reforma estructural que profundice el camino de la democracia plena.

De un modelo de partido hegemónico que duró 71 años, los mexicanos hemos pasado a vivir un modelo oligárquico de derecha, que encabezan el Partido Acción Nacional (PAN) y los principales grupos empresariales. Un gobierno que es ejemplo del modelo neoliberal impulsado por Estados Unidos desde hace 30 años.

En este contexto, ¿cómo ubicar la lucha por el poder en el México actual? ¿Qué pasa con los partidos, que son los únicos que tienen el monopolio de las candidaturas políticas?

En primer lugar el subsistema de partidos en México, construido desde 1946, con un presidencialismo autoritario y un

modelo de elección plebiscitaria (donde la competencia aparece hace escasos 20 años), es un ejemplo histórico de inequidad.

Entre 1917 y 1946, por ejemplo, conocemos un subsistema de partidos que el Estado orientó para afianzar a la fuerza social triunfadora del proceso revolucionario. Esa época es ejemplo de cómo se pudo anular la presencia de partidos regionales y fuerzas opositoras independientes. Una de ellas sobrevivió desde 1939, el PAN, que se presentó desde su nacimiento como una organización ideológicamente de derecha, opositora al modelo político impulsado desde 1934 por el gobierno cardenista y su partido. El PAN nació contra el nacionalismo revolucionario que entonces defendía el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fincado en el lema de democracia y justicia social.

Entre 1946 y 1983 se desarrolla en México un periodo que puede denominarse de "pluralismo sin alternancia"; las elecciones son más ejercicios de corte plebiscitario que verdaderas competencias políticas. De manera muy desigual, los grupos de izquierda (comunistas y socialistas) y de derecha (panistas y sinarquistas) enfrentaban a la maquinaria del Estado y su partido (PRI).

Hasta la década de los ochenta, entre el pasmo social y la abstención electoral, en los procesos de renovación y cambio de ayuntamientos y legislaturas estatales, el PRI no tenía opositor ni adversario en casi todos los puestos en disputa por alcanzar el poder.

En el año de 1983 la sociedad empieza poco a poco a transformar con su participación la lucha por el poder. Tanto de la derecha como luego de la izquierda saldrían las primeras grandes victorias electorales que provocaron en 1990 la presencia de los primeros gobiernos estatales divididos (Baja California, Chihuahua, Querétaro, etcétera), es decir, donde el partido

que gana el gobierno estatal no tiene el control mayoritario de las legislaturas locales y estatales.

Los triunfos electorales que los partidos opositores al PRI obtienen desde la década de los ochenta, se explican por las grandes movilizaciones cívicas y sociales que han ido configurando un amplio proceso de lucha que busca básicamente construir en México una alternativa democrática y un verdadero sistema de partidos.

Movilización ciudadana, agotamiento del modelo de control priísta y entrada al juego electoral de las izquierdas, construyeron un escenario en las últimas dos décadas que muchos no vacilaron en denominar "de la transición democrática".

El presente no se puede entender sin justipreciar correctamente el valor de los movimientos sociales recientes que reivindican la lucha por la democracia; por ejemplo: el de 1986 en Chihuahua, por la defensa del voto popular; el de la Asamblea Democrática en 1987, que reunió por primera vez en la historia moderna a líderes de todos los signos ideológicos para impulsar una transición democrática en México; la movilización panista de 1988 que encabezó Manuel de Jesús Clouthier; en 1989, la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas y miles de sus seguidores para entablar un diálogo con el gobierno, tendiente a alcanzar la transición democrática; en el mismo año, la creación de un organismo independiente de la sociedad civil como lo fue el Consejo para la Democracia; en 1990, el llamado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a un Acuerdo Nacional para la Democracia, con el objetivo de impulsar una nueva legislación electoral federal; la propuesta en 1991 de Andrés Manuel López Obrador para alcanzar una transición pactada a la democracia, enmarcada por el clima de fraude electoral en las elecciones locales de Tabasco; también en 1991, la convocatoria del PAN a un Consenso Nacional por la Democracia, encuadrada por las fraudulentas elecciones federales en ese año; el Movi-

miento Ciudadano por la Democracia, propuesto por Salvador Nava después del fraude electoral en San Luis Potosí; en 1992, los tabasqueños con su "Exodo por la Democracia", que demandaba el respeto a la legalidad y el respeto al sufragio efectivo; en 1994, luego de los asesinatos políticos en plena campaña presidencial, los acuerdos del PAN y del PRD para exigir al gobierno federal una nueva reforma electoral que garantizara la autonomía real de los organismos electorales encargados de la preparación, vigilancia y desarrollo de las elecciones; en 1996, la exigencia nuevamente de los panistas y perredistas para darle todas las facultades a un Tribunal Electoral como máximo poder del Estado mexicano, con objeto de dar validez a la elección presidencial, entre otros cambios y reformas electorales significativos para la consolidación partidaria, como lo fue el aumento al financiamiento público de los partidos.

En México tenemos que reiterarlo: desde 1988, sólo a través de la movilización social se ha podido avanzar a un escenario de transición democrática. Sin embargo, también desde ese año crucial, está presente la regresión histórica en el comportamiento de los principales actores de nuestra vida política: el Ejecutivo no entiende las reformas democráticas, el Legislativo no las quiere y el Poder Judicial muestra una incapacidad genética para promover iniciativas que hace que la transición se bloquee constantemente.

De 1989 a la fecha se han llevado a cabo cinco reformas constitucionales y sus respectivos cambios reglamentarios en materia electoral. Sigue siendo la materia electoral el principal litigio político de los mexicanos.

Algunos hechos ilustran la crisis de los momentos actuales. Las elecciones federales del 6 de julio de 1997 son el primer gran ejemplo, por sus resultados, en alterar al viejo sistema político priísta: 1) por primera vez fue electo el jefe de gobierno del territorio más poblado del país, el Distrito Federal, capital

de los poderes federales de la república, por sufragio directo, universal y secreto y, además, el triunfo recayó en un partido de oposición de centroizquierda, el Partido de la Revolución Democrática, y 2) por primera vez, desde la fundación del partido oficial (PRI), éste no obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Se ha pensado que el triunfo de Cárdenas en el Distrito Federal habría provocado lo que vivimos en las últimas elecciones federales: una nueva etapa para el sistema de partidos caracterizada por el triunfo, en muchos municipios, de los partidos de oposición al PRI y por un proceso interesante de alianzas partidistas de los tres grandes partidos con otras organizaciones pequeñas. Vuelvo a recordarlo, desde 1983 se aprecia un desplazamiento del electorado en las regiones mexicanas, lo que implicó un "pluralismo con alternancia".

En 1997 se inicia una transformación profunda en el juego político a través del cambio electoral. El sistema de partidos cambió. De un sistema de partido hegemónico se pasó poco a poco a un sistema más o menos pluripartidista, donde se afirman como fuerzas principales al menos tres partidos: el PAN, el PRI y el PRD. Los resultados electorales de 1997, 2000, 2003 y 2006 en la integración de la Cámara de Diputados han sido fundamentales para explicar la nueva realidad partidista, pero también para valorar a un gobierno federal incapaz de transformar en acuerdos las diferencias en el seno del Poder Legislativo. Lo mismo se puede decir para el gobierno de Vicente Fox que para el de Ernesto Zedillo.

En el sexenio foxista (2000-2006) se pudo constatar que la mayoría de los puntos de negociación en las cámaras fue de acuerdos apoyados por legisladores del PRI y del PAN. En muchas negociaciones y propuestas legislativas la organización de izquierda fue excluida.

Las profundas diferencias programáticas en ciertas áreas de la economía entre el PRD y los aliados PRI y PAN, han generado obstáculos a veces infranqueables para lograr consensos democráticos. Vicente Fox ha ilustrado esta debilidad en su muy peculiar manera: "Todavía hay muchas decisiones, si no es que la mayoría, que se toman por un sentido partidista, por un sentido particular e individualista, protegiendo intereses individuales. Lo vemos en las cámaras de diputados y de senadores".¹

Un segundo y fundamental momento que explica el interés de impulsar una alternativa democrática para el régimen mexicano aparece en el año 2000. El candidato del PAN, Vicente Fox, triunfa sobre los candidatos del PRI y del PRD. Sin embargo, los resultados de ese cambio no tuvieron mayores consecuencias: hubo alternancia pero ningún nuevo acuerdo pluripartidista que impulsara una transición.

En julio del año 2000, de repente todo era nuevo. Voto útil, democracia, alternancia política, credibilidad, tolerancia, fueron conceptos aclamados por casi todos los mexicanos. Se supuso que el triunfo de Vicente Fox formaba parte de un proceso de regeneración casi total de la nación.

Algunos panistas históricos que habían renunciado al PAN desde los años noventa por considerar que su partido había perdido el rumbo, pensaron que la llegada de Fox a la presidencia daría sustento a dos hechos fundamentales: primero, a la reconciliación nacional y al pacto de gobernabilidad que llevase a los mejores hombres de México, sin importar sus orígenes partidistas, a los equipos del gabinete presidencial y a apoyar al Poder Ejecutivo.

Segundo, el programa de gobernabilidad debería dar orden, según la importancia de los asuntos para el bien de la sociedad,

¹ *La Jornada* (14 de mayo de 2005), 1.

al innumerable cúmulo de urgencias que corrigieran los errores vigentes. Sin embargo, la sociedad mexicana no experimentó ninguna mejoría en ese sexenio, que sin duda ha sido uno de los peores de nuestra historia.

Por otra parte, la elevada participación en las elecciones federales de 2000 suponía la configuración de una sociedad ilusionada y llena de grandes motivaciones, derivadas de la lucha electoral. Se dijo que la transición comenzaba con el triunfo panista. Para quienes demandaron el voto útil, se trataba de justificar su decisión por el bien del país y de la democracia. Pocos dudaban: se estaba ante un hecho inédito.

Sin embargo, las elecciones federales de 2003, con un abultado abstencionismo (confirmado en todas y cada una de las entidades federativas donde ocurrieron elecciones locales), demostraron que la transición de 2000 era sólo un espejismo democrático.²

Las elecciones estatales a lo largo de cinco años, entre 2001 y 2006, lo confirmaron. La sociedad no soportó un gobierno fracasado y una desastrosa gestión que provocó la salida de más de cuatro millones de mexicanos hacia Estados Unidos en busca de empleo.

En el plano electoral, durante seis años el PAN desarrolló un catálogo de prácticas electorales de Estado y de alianzas con otros grupos para modificar el sistema político mexicano, pero no para transitar a la democracia. En las elecciones de Baja California, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco, han actuado como dinastía. En Yucatán y San Luis Potosí el PAN se convirtió en el partido más fraudulento y fue en esas entidades donde se hizo más alarde de dispendio electoral. En Morelos,

² Abstencionismo en México en las elecciones federales de 1988-2006: 1988, 50%; 1994, 25%; 2000, 24%; 2006, 40%. Fuente: Instituto Federal Electoral. México, informes de resultados electorales 1988-2006.

los panistas se han asociado vía la corrupción a grupos que actúan al margen de la ley.

El panismo en el gobierno ha creado en los últimos seis años la simbiosis empresa-Estado. Desde la integración del gabinete foxista se observó la entrega de los puestos a representantes de los grupos de interés o a las redes de contribuyentes que sostuvieron la campaña foxista a través de "los amigos de Fox". Este grupo, que en la campaña llevó a Fox al triunfo, proporcionó de manera ilícita cuantiosos recursos y sus integrantes se convirtieron en los socios privilegiados de los negocios que pueden obtenerse del favor público.

El proyecto panista se enmarca dentro del proyecto de privatización al extremo de la economía, la política y la cultura. Representa una mínima oposición al Tratado de Libre Comercio y lo más alejado de la transición democrática.

La larga cadena de ilícitos durante los últimos seis años de este gobierno, pasando por los hijastros abusivos, los cuñados incómodos y los privilegios otorgados a los beneficiarios del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), dan testimonio de la corrupción del PAN, que moderniza las formas tradicionales priístas de caciquismo e instituye el robo y el latrocinio con guante blanco. "Manos blancas y bolsillos repletos" y "manos limpias y uñas largas", son las respuestas populares que la sociedad ha empezado a difundir al referirse en contrapartida al lema de campaña del PAN de 2006: "manos limpias".

En el año 2000 los panistas llegaron al poder no para reformar el Estado, sino para colonizarlo y convertirlo en botín de intereses privados. Como dice Porfirio Muñoz Ledo:

Si en las zonas más oscuras del antiguo Partido Revolucionario Institucional prevalecía el conflicto de intereses, ahora se ha instalado el tráfico de influencias. Las dos caras de nuestro

patrimonialismo: políticos metidos en los negocios y empresarios metidos en la política.³

Carlos Hank González y Vicente Fox son los mejores ejemplos de esta situación.

En sus mejores tiempos, el PRI, por un prurito de autonomía política del sistema, evitaba en lo posible que ingresaran directamente dineros privados a las campañas electorales, que luego pudieran convertirse en jugosos contratos. Así, los gobernantes llegaban en lo posible con las manos libres para escoger sus propios terrenos de corrupción. Ésa es la razón por la que el partido del gobierno propuso en 1995 que sólo hubiera 10% de recursos privados en las campañas. En cambio, el Partido Acción Nacional insistió machaconamente en 50%. Finalmente, en una negociación tras bambalinas y a despecho de los acuerdos adoptados, el gobierno concedió que el 10% convenido no se circunscribiera a los recursos públicos de cada campaña, sino que se computara sobre el total de la bolsa asignada al conjunto de los partidos. De esa manera, la suma ascendió a 417 millones de dinero privado permitidos a cada candidato. Si a esto añadimos las aportaciones ocultas que transcurren libremente gracias al secreto bancario y a la insuficiencia de los instrumentos de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), concluiremos que las elecciones en México, a pesar de la magnitud de los recursos públicos que obtienen los partidos, son dominadas por los fondos privados y por las complicidades tejidas con las empresas mediáticas.

Por cierto, el presupuesto público que el IFE otorgó en 2006 a los partidos políticos para el gasto publicitario en medios, en las campañas de sus candidatos a presidente de la república, diputados y senadores, fue de 1 680 millones de pe-

³ *El Universal* (15 de junio de 2006), p. 12.

sos. Esta cifra se pudo duplicar, si tomamos en cuenta que la Ley Electoral permite aplicar hasta el doble de recursos privados para el gasto publicitario.

Los propios panistas históricos han calificado al gobierno foxista cuando señalan que

definitivamente hemos padecido un gobierno del cambio, que en vez de avanzar ha retrocedido en las metas fundamentales. Las instituciones nacionales han pervertido hasta el cinismo al gobierno, que es la fuente más importante de la corrupción. Se detentan los bienes que pertenecen al pueblo para ser utilizados para usufructo personal.⁴

Las recientes elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 han sido especialmente virulentas.

En estas elecciones, como ya se había observado en 2003, el gobierno federal utilizó todos los recursos a su alcance para evitar lo que anunciaban las encuestas de opinión desde aquel año: un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática. De hecho, hasta el final del proceso de campaña, desde la presidencia se impulsó un modelo de comunicación orientado a desgastar la figura y la presencia del líder perredista. En los meses de mayo y junio el proceso tomó un rumbo inédito. Se promovió, por parte del PAN y del gobierno federal, una campaña del miedo, con la intromisión grosera del Ejecutivo federal. En 2003, Fox habría gastado más de 6 000 millones de pesos en la promoción de su gobierno para atraer votos y lo hizo con 1 874 000 promocionales en radio y televisión. Entre enero y mayo de 2006, el presidente Fox apareció en 400 000 *spots*, para convertirse en el principal candidato en campaña.⁵

⁴ Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, *El Universal* (5 de julio de 2006), 8.

⁵ Revista *Proceso* (11 de junio de 2006), 23

Sobre este proceso electoral se expresó un buen número de comentarios. Enrique Krauze, por ejemplo, señaló: “en julio de 2006 y por primera vez en su historia contemporánea, México tendrá la oportunidad de consolidar su régimen democrático” (Krauze, 2006: 107). Este autor insistía en que de 1997 hacia atrás en México se vivieron tiempos predemocráticos.

Alejandra Lajous, por su parte, señalaba: “la actual lucha electoral y su resultado final requieren más de sumas que de divisiones, los antagonismos personales, aunque entendibles, son jalones que no pueden transformarse en políticas de gobierno” (Lajous, 2006: 305).

Lorenzo Meyer y Miguel Basáñez, al prologar un libro de la periodista Carmen Aristegui, señalaban que “es probable que por primera vez en muchas décadas se esté eligiendo entre dos opciones claramente diferenciadas, sobre el rumbo y el futuro del país. Cabe aclarar que ambas son necesarias para el desarrollo de México” (Aristegui, 2006: 17).

Manuel Camacho escribió que el 2 de julio “es un momento que se podría llamar histórico: en las elecciones de 2006, se disputa el rumbo de la nación [...] sobre todo la orientación económica [...] el dilema es la confrontación o el acuerdo” (Camacho, 2006: 307).

Finalmente, José Woldenberg señalaba días antes del 2 de julio: “las elecciones que están en curso expresan el resultado de una transición democrática [...] hemos pasado de un sistema de partido hegemónico a uno equilibrado y competitivo” (Woldenberg, 2006: 4).

Mucho se ha escrito antes y después de las elecciones del pasado 2 de julio de 2006. Las coincidencias se pueden resumir diciendo que son las segundas elecciones que le infligen una severa derrota al histórico partido hegemónico (PRI). Son también las primeras donde existían tres candidatos fuertes y casi con las mismas posibilidades de triunfar. Son asimismo las

elecciones que confirman una tendencia de hace seis años: las campañas electorales son ya propiedad exclusiva de los dueños de las grandes empresas televisivas. Finalmente, son elecciones que confirman lo peor de nuestra tradición política: siguen siendo fraudulentas.

Otra vez, como sucede cada seis años, “el país se vuelve otro país”, como lo ha dicho uno de nuestros literatos mayores, José Emilio Pacheco: “nuestra historia no se mide por siglos ni por décadas, nuestro sistema es el métrico sexenal”.⁶

A las de 1988 se les identificó como las elecciones del fraude genérico y de la ruptura; las de 1994 fueron conocidas como las de los crímenes políticos y la crisis, y las de 2000 como las del cambio y la alternancia.

Las de 2006 pasarán a la historia como las elecciones de la traición y del golpe empresarial y burocrático, en los que un gobierno que alcanzó el poder gracias a los avances democráticos impulsados en México desde 1983, se convirtió en el primer obstáculo contra la voluntad ciudadana. Las elecciones del año 2000 no cambiaron la esencia autoritaria del régimen mexicano. Fox terminó su gobierno gobernando sólo por decreto; deja a un México agraviado y dividido. Con 20 millones de mexicanos más en el padrón electoral, el PAN y su candidato pierden en 2006 más de un millón de votos respecto a la contienda de 2000. El PRI sólo obtiene 8 millones y el PRD incrementa en la misma cantidad la votación alcanzada seis años atrás.

Fox dejó a una sociedad enardecida, polarizada, en la que ya es real el riesgo de una balcanización entre el México del norte y el del sur, donde sobreviven más de 60 millones de pobres.

No es difícil saber hacia dónde va el país cuando el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no limpió la pasada elección de acuerdo con los principios consti-

⁶ Nota preliminar al libro de Salvador Novo (1994: 11).

tucionales. El 0.58% de diferencia de votos entre Calderón y López Obrador puede dar lugar a un enfrentamiento social impredecible.

México, a diferencia de 1988, está al borde de una crisis grave. Las consecuencias sociales de la política neoliberal de los últimos 24 años no se pueden ocultar.

El modelo económico ha engendrado millones de excluidos por todos los rumbos del país. En la coyuntura de los últimos acontecimientos, los partidos han sido rebasados por una nueva corriente social de movilización, como ya se manifestó en el estado de Oaxaca.

Paradójicamente, la participación electoral del 2 de julio en las elecciones federales de México dio una lección de democracia. La presencia ciudadana mediante actos democráticos para construir una mejor sociedad de manera pacífica, fue frenada nuevamente. Se volvió a desdeñar a los comicios como un mecanismo necesario para la regulación de los conflictos. Una sociedad abstencionista o desafecta a la política vuelve estéril cualquier sistema político.

La puesta en práctica de los encargados de preparar, organizar y vigilar las elecciones, es decir, el árbitro de la contienda, actuó en contra de la democracia y arrojó sombras sobre el proceso.

El Instituto Federal Electoral fue aliado de un partido, el PAN, y de un gobierno, el federal. A lo largo del proceso electoral que se inició en octubre del año 2005, el IFE dio muestras de complacencia para con el presidente de la república y su intervencionismo en las elecciones. La autoridad electoral permitió las inéditas campañas de terror y odio promovidas por el PAN en contra del candidato perredista. Nunca fue una autoridad imparcial, como ha sido denunciado por millones de mexicanos e igualmente documentado por los mismos magistrados del Tribunal Electoral. En la preparación de la elección, en la jornada

electoral y en los resultados de las elecciones del 2 de julio, el IFE actuó como un cómplice en el operativo de Estado en contra de un candidato y tres partidos.

En los primeros meses del gobierno que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, no hay propuesta que contenga y evite la confrontación partidista.

Nuestros partidos políticos mayores tienen divisiones internas que van más allá de un reacomodo organizativo, a partir de los resultados de 2006. Las diferencias internas de los partidos se hacen evidentes en el complejo mundo del Poder Legislativo, que es su natural campo de acción. No existen acuerdos que vayan más allá del interés coyuntural. Los resultados electorales de 2006, que podrían servir para la reestructuración de nuestro modelo partidista, confunden a sus actores. En realidad, no se comprende cómo se puede perder la inmensa movilidad social del año 2006. Los partidos se acomodan al más simple de los comportamientos partidarios en una democracia, que implica sólo "vender", para cada momento de la votación, el número de legisladores con que cuentan. Ninguna de las fuerzas que integran el Poder Legislativo presenta algún proyecto para organizar un conjunto de acciones y actividades que involucren a los gobernados.

En México, nuestros partidos deben pasar de un modelo simple de alternancia política a otro, donde la manifestación de simpatías y preferencias se respete y sirva para organizar y canalizar opiniones que consoliden al Estado.

La situación en 2007, a diferencia de 1988, nos puede llevar a un régimen autoritario que sustituya a los partidos en su función articuladora del orden democrático. El autismo de los partidos políticos está provocando que los riesgos de la ingobernabilidad sean más que nunca latentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcocer V., Jorge, y Humberto Musacchio. *Manual para lectores y electores*. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.
- Álvarez, Luis H. *Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia*. México: Plaza y Janés, 2006.
- Aristegui, Carmen. *Uno de dos*. México: Grijalbo, 2006.
- Arreola, Federico. *La lucha de la gente en contra del poder del dinero*. México: Nuevo Siglo Aguilar, 2006.
- Bockenforde, Ernst Wolfgang. *Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia*. Madrid: Trotta, 2000.
- Camacho, Manuel. *El desacuerdo nacional. Orígenes, consecuencias y propuestas de solución*. México: Aguilar, 2006.
- Krauze, Enrique. *Para salir de Babel*. México: Tusquets, 2006.
- Lajous, Alejandra. *AMILO: entre la atracción y el temor. Una crónica del 2003 al 2005*. México: Océano, 2006.
- Loret de Mola, Rafael. *Escenarios*. México: Océano, 2006.
- Meyer, Lorenzo. *El Estado en busca del ciudadano. Un ensayo sobre el proceso político mexicano contemporáneo*. México: Océano, 2005.
- Novo, Salvador. *La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.
- Revels, José. *Las manos sucias del PAN. Historia de un atraco multimillonario a los más pobres*. México: Planeta, 2006.
- Rodríguez Araujo, Octavio, y Carlos Sirvent. *Instituciones electorales y partidos políticos en México*. México: Jorale Editores, 2005.
- Woldenberg, José. “La democracia ayer, hoy y mañana. La falta de mayoría en el Congreso”, mimeo., 2006.

Revista de Investigación Social,

AÑO II, NÚMERO 3

editado por el Departamento de Publicaciones
del Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se terminó de imprimir

en mayo de 2007 en Master Copy S. A. de C. V.,
av. Coyoacán 1450, col. Del Valle, C. P. 03220, México, D. F.

La edición consta de 200 ejemplares impresos
en papel cultural de 90 gramos.